

**El Tribunal de Justicia de las Comunidades como factor
de integración jurídica**

Eduardo ESPÍN

Universitat Autònoma de Barcelona

Working Paper n.15
Barcelona 1990

I. Introducción.

No es el objetivo de estas páginas hacer una exposición sobre la organización, funcionamiento y competencia del órgano jurisdiccional que encarna la justicia comunitaria, el Tribunal de Justicia de las Comunidades, con sede en Luxemburgo. Se trata, por el contrario, de exponer algunas reflexiones sobre el significado del Tribunal de Justicia (en adelante TJ o simplemente, «el Tribunal») en el proceso de integración europea. Ciertamente, ello requiere adentrarse en las competencias jurisdiccionales del Tribunal, pero no con la finalidad de efectuar una enumeración de las mismas o un análisis de los diversos procedimientos previstos en los Tratados constitutivos de las Comunidades, sino para ver la funcionalidad de tales competencias y procedimientos desde la perspectiva de la integración jurídica y política de las Comunidades.

1. Jurisdicción europea y jurisdicciones estatales.

Una primera característica que conviene precisar es, qué se entiende exactamente por justicia comunitaria. Porque, frente a lo que pudiera parecer en un primer análisis, el sistema de justicia comunitaria no se restringe al Tribunal de Luxemburgo, sino que se apoya en un esquema bifronte en el que uno de los pies lo constituyen los tribunales internos de los Estados miembros y el otro el Tribunal, órgano de justicia específicamente comunitario. En efecto, el Tribunal es, sin duda, el garante de la recta interpretación y aplicación del derecho comunitario, tanto de los tratados fundacionales como del derecho derivado. Ahora bien, no quiere ello decir que sea el Tribunal el único órgano jurisdiccional que interpreta y aplica el corpus de derecho comunitario. Al contrario, una vez sentada por el Tribunal la doctrina del efecto directo de un amplio sector del derecho comunitario (Sentencia Van Gen en Loos, de 5 de febrero de 1963), que no se deriva de ningún precepto expreso de los Tratados, ha quedado sólidamente establecida la aplicabilidad inmediata del mismo por parte de todas las jurisdicciones de los países miembros, con las excepciones de rigor respecto a determinadas disposiciones de los tratados y de aquellos actos comunitarios que requieran desarrollo por parte de los Estados miembros. Aplicación que implica inevitablemente y en mayor o menor medida según los casos, la necesidad de su interpretación, al menos de su alcance en el caso concreto.

Esto quiere decir que la justicia comunitaria es, en primer lugar, la aplicación que del derecho comunitario efectúan las jurisdicciones nacionales, con la interrelación que en su momento veremos con la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo. Como se ha resaltado —por ejemplo, por García de Enterría, quien ha

descrito esta situación diciendo que la jurisdicción general o de derecho común en derecho comunitario corresponde a los tribunales nacionales y no al Tribunal de Justicia—, sólo mediante esta apuesta arriesgada de confiar en los tribunales de cada país como principales agentes aplicadores del derecho comunitario, resulta posible concebir la construcción de un derecho europeo de aplicación directa. Cualquier otra vía (por ejemplo, tribunales especiales) parece, no ya técnicamente compleja, sino, con toda probabilidad, inviable.

El otro pie sobre el que se apoya la justicia comunitaria, es, como resulta obvio, el propio Tribunal de Justicia. Veremos a continuación las competencias jurisdiccionales por medio de las cuales el Tribunal actúa como factor de integración. Baste decir, a título introductorio, que dicha labor integradora es especialmente relevante y que se manifiesta en funciones propias de tribunal superior en derecho comunitario y de otras que podrían calificarse de propias de un tribunal constitucional de las Comunidades.

2. La justicia comunitaria como factor de integración.

Invirtiendo lo que podría parecer el orden natural de la exposición, voy a esbozar brevemente las conclusiones a las que querría llegar; conclusiones que, por lo demás, no son, ni podrían serlo, de gran originalidad, puesto que, no ya en los demás países (cuyo conocimiento del derecho comunitario está mucho más desarrollado), sino también en el nuestro, se ha escrito y traducido ya mucho en poco tiempo sobre esta materia.

Tales proposiciones, que de ser ciertas confirmarían el papel primordial del Tribunal de Justicia en el proceso de integración europea, serían las siguientes:

1ª, que la justicia comunitaria constituye un sistema jurisdiccional integrado, cuyos principales rasgos definidores serían:

a. primacía del derecho común sobre los ordenamientos particulares de los países integrantes.

b. acceso directo de los ciudadanos a los tribunales en cuanto a la aplicación de ese derecho común.

c. existencia de un tribunal superior que unifique, al menos hasta cierto punto, la interpretación del derecho común al sistema.

d. coercibilidad de las resoluciones de los tribunales que aplican el derecho comunitario y que conforman ese sistema jurisdiccional integrado.

2ª, que en la tradicional y quizás ya superada antítesis entre si el TJ es un tribunal de naturaleza internacional o análogo a un tribunal interno, este último carácter es sin duda dominante, puesto que son propias de un tribunal interno la mayor parte de sus competencias y, sobre todo, las más relevantes de ellas.

3ª, finalmente, y como ya se ha anticipado, que el TJ opera en una doble vertiente, como un tribunal constitucional y como un tribunal superior.

II. La justicia comunitaria como sistema jurisdiccional integrado.

1. La primacía del derecho común.

No es preciso extenderse sobre el primero de los rasgos enunciados, la primacía del derecho común. Tal primacía, más que un rasgo esencial, es la misma base, el requisito previo que permite hablar de integración. Esto parece tan evidente que excusa de toda justificación. Si los países miembros pudieran seguir produciendo normas divergentes de las comunitarias que fueran aplicadas por sus propios tribunales, es evidente que no se podría hablar siquiera de un orden jurídico común. El Tribunal de Justicia aclaró de forma irreversible esta situación ya en la Sentencia Da Costa (1963). Se trata de una regla absoluta que no admite excepciones. Así, cualquier disposición de derecho comunitario, sea de los tratados constitutivos o de derecho derivado, se aplica antes que cualquier disposición de derecho interno. Y, téngase bien en cuenta, esto es así sin importar el rango de la disposición interna que sea contraria a la del derecho comunitario.

A este respecto, resulta de interés profundizar en el mecanismo técnico que explica esta primacía, que no es otro que el principio de competencia, tan traído y llevado en nuestra doctrina a partir de la Constitución, pues es el que asimismo explica fenómenos relativamente análogos (por ejemplo, la distribución competencial entre Estado y comunidades Autónomas), así como (al menos, parcialmente) otros fenómenos de interrelación normativa (relaciones entre leyes orgánicas y ordinarias). El principio de competencia se plasma, en lo que respecta al supuesto que nos ocupa, en que corresponde a la Comunidad Europea, a través de sus órganos, dictar la regulación sobre determinadas materias, y ello a consecuencia de la transferencia de competencias normativas operada por los propios tratados constitutivos.

A raíz de tal transferencia de competencias es a la Comunidad Europea, a través del órgano que sea competente, a quien corresponde legislar sobre tales materias, por lo que el derecho comunitario sobre las mismas escapa ya a la inserción jerarquizada en el ordenamiento interno. En éste se abre, por la vía de los tratados constitutivos, una apertura hacia el derecho comunitario, el cual es de aplicación preferente por encima, incluso, de una hipotética norma constitucional contraria.

En España, a diferencia de lo que ocurría en otros países, la Constitución preveía ya expresamente consecuencias como la mencionada. Y ello fue resultado, precisamente, de que la futura adhesión a la Comunidad Europea estuvo en todo momento en la mente del constituyente español, lo que le hizo a éste prever de forma expresa dicha apertura —o ruptura, como se ha llegado a decir—, en el importante artículo 93 de nuestra Constitución. Este precepto, al permitir la transferencia de facultades derivadas de la Constitución (lo que no puede dejar de entenderse, bajo tal eufemismo mitigador, sino como facultades que representan un ejercicio de soberanía) a organizaciones internacionales, hace factible que la regulación de ciertas materias pueda escapar al legislador interno. Y dicha transferencia a Bruselas la competencia para regular determinada materia hace que si esta normativa comunitaria es contraria a un determinado precepto material de la propia Constitución, haya que dejar de aplicar este precepto en beneficio de la regulación comunitaria. Y ello no porque ésta sea jerárquicamente superior a la Constitución, sino porque la regulación de dicha materia ha sido transferida, mediante procedimientos, eso sí, acordes con la Constitución, a una organización internacional —supranacional, habría que precisar en este caso— como la Comunidad Europea. Lo cual excluye también la aplicabilidad para dicha contradicción de un mecanismo como el del art. 95 CE. Sin duda, esta aplicación del principio de competencia comporta numerosos problemas (piénsese, por ejemplo, en las repercusiones que atañen a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas o las cuestiones referentes a los derechos fundamentales), pero baste con lo dicho para apuntar el fundamento constitucional en nuestro país de la primacía del derecho comunitario sobre el interno de los Estados miembros.

2. El acceso directo de los ciudadanos a los tribunales competentes para aplicar el derecho comunitario.

Si, como se ha dicho al comienzo, se entiende que la noción de justicia comunitaria comprende también la aplicación del derecho por los tribunales internos, es evidente que el ciudadano europeo posee la posibilidad de acceder

directamente a los órganos judiciales que aplican el derecho comunitario en todos aquellos supuestos en que la ostente ante los tribunales internos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si bien los tribunales internos tienen competencia, efectivamente, para aplicar el derecho comunitario, no la tienen en cambio para controlar la regularidad de la actuación de los órganos comunitarios, competencia que corresponde al TJ.

Pues bien, el particular tiene asimismo posibilidad para acceder directamente ante el propio Tribunal de Justicia en determinados supuestos, y puede también, aunque la decisión corresponda al órgano judicial interno a quo, acceder por vía incidental en el marco de un proceso seguido ante la jurisdicción de su país —incluso, aunque técnicamente, no sea parte en tal incidente, sí puede intervenir en el mismo.

Veamos pues, en forma esquemática, los procedimientos a través de los cuales el particular accede directamente al tribunal al que corresponda la aplicación del derecho comunitario.

a) Ciertamente, y aunque no se hace mención de ello con la debida relevancia por parte de la doctrina, los particulares pueden accionar ante los tribunales de su país, por medio de todos aquellos procedimientos contemplados en su ordenamiento, para obtener la satisfacción de sus intereses y derechos que deriven de las normas comunitarias. Es obvio que no podría aquí hacerse una referencia a los supuestos en que esta hipótesis sea concebible, so pena de extendernos en exceso, pero sí ha de recordarse que incluso la inacción del Estado miembro puede eventualmente ponerse de relieve por esta vía. Esto es, no cabe descartar que, en determinados supuestos, el ciudadano pudiera contar con un procedimiento ordinario de reclamación ante sus tribunales nacionales. Aunque no es prudente aventurar soluciones sin un análisis detenido, que no es posible en este marco, puede pensarse en la exigencia de indemnizaciones en caso de perjuicios por determinados incumplimientos o soluciones de ese tipo que son, en realidad, una consecuencia de la directa aplicabilidad del derecho comunitario.

b) Ahora bien, sin duda, los procedimientos que marcan el carácter distintivo del derecho comunitario (y que separan al Tribunal de Luxemburgo de otros tribunales de derecho internacional) es la posibilidad de acceso al mismo por parte de los ciudadanos de los Estados miembros. Tenemos entre tales recursos, por un lado, los recursos directos (principalmente el recurso de anulación y el recurso por inactividad), y, por otro, los procedimientos que podríamos calificar de incidentales (excepción de ilegalidad y cuestión prejudicial).

— En cuanto a los recursos en los que es posible a los particulares el acceso directo ante el Tribunal de Justicia, permiten que el particular ataque en forma directa tanto una actuación ilegal como la inacción de órganos comunitarios. El recurso de anulación permite a los particulares recurrir contra aquellas decisiones singulares (no reglamentos, por tanto) dirigidas contra ellos o que les afecten directa o individualmente. Se trata, por tanto, de una legitimación bastante restringida. Hay que entender que quedan individualmente afectados aquellos que se encuentran en similar posición —y cuyos intereses son, en consecuencia, semejantes— que aquellos a los que se dirigen los actos impugnados. Y es asimismo preciso que la afectación sea directa, es decir, sin mediación necesaria de medidas de aplicación por parte del Estado.

En cuanto al recurso por inactividad, permite a un particular exigir a una institución comunitaria (Comisión o Consejo) la producción de un acto coercitivo (esto es, no puede pretenderse una recomendación o dictamen) dirigido a él como destinatario concreto (no puede reclamarse la emanación de un reglamento). Tras la producción de este acto cabe también el anteriormente visto recurso de anulación.

Finalmente, también hay que contar entre estos recursos directos el que pretende una indemnización por responsabilidad civil extracontractual. La doctrina lo ha calificado frecuentemente como un último recurso frente a la actuación de la Comunidad, y permite la exigencia de responsabilidad por los daños causados por órganos o agentes comunitarios en el ejercicio de sus competencias. Existencia del acto comunitario y del daño, así como nexo causal y directo entre ambos son rasgos que singularizan los supuestos en los que cabe este remedio. La interpretación por parte del Tribunal, por razones obvias, ha sido sumamente restrictiva.

— En cuanto a los procedimientos indirectos o, más precisamente, incidentales, nos encontramos con la excepción de ilegalidad y con la cuestión prejudicial en su doble manifestación. La excepción de ilegalidad supone una vía incidental de control de los reglamentos, en procedimientos seguidos ante el propio Tribunal de Justicia, que compensa la imposibilidad para los particulares de atacarlos de manera directa. Los particulares podrán, de esta forma, impugnar un reglamento (entendido en sentido material, esto es, como disposición materialmente general y que se aplica a una serie indeterminada o genérica de supuestos análogos), cuando la legalidad de un determinado acto dictado en aplicación del mismo depende de la legalidad del propio reglamento. O, dicho en otros términos, cuando se impugna la validez de la norma en la que se basa un acto concreto de aplicación. La consecuencia de la estimación de un recurso semejante,

digamos ya de paso, es la nulidad erga omnes de la decisión individual y la simple inaplicación para dicho supuesto del reglamento cuestionado.

Hemos visto una serie de recursos que permite el acceso directo de los ciudadanos al Tribunal de Justicia. Ahora bien, sin duda lo más característico de la justicia comunitaria y lo que más atención ha despertado en la doctrina, por las razones (justificadas), que ahora veremos, es la cuestión prejudicial. Consiste en la consulta que un tribunal interno que ha de aplicar una norma comunitaria hace al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o la validez de dicha norma. La cuestión prejudicial tiene carácter preceptivo, en principio, cuando se trate de una resolución frente a la que ya no cabe ulterior recurso. Se trata, en definitiva, de un mecanismo de unificación de la interpretación del derecho comunitario y como tal, sólo es preciso que opere en la última instancia que ha de conocer del asunto. La cuestión prejudicial tiene, como es bien sabido, dos manifestaciones, la cuestión de interpretación (cómo ha de interpretarse determinada norma de derecho comunitario que admita más de un sentido y que sea de aplicación al caso contemplado en el proceso a quo) y la cuestión de validez (manifestación próxima a la excepción de ilegalidad, en la que se plantea la validez de una norma comunitaria).

A primera vista podría parecer que son los recursos directos los que más claramente acercan el sistema de justicia comunitario a un sistema integrado. Esto podría ser cierto en un plano teórico, pero no lo es en la práctica. Y no son los procedimientos directos sensu stricto los que más acercan la justicia comunitaria a un sistema integrado por la misma razón por la que hemos visto que el sistema de derecho común no es la intervención del Tribunal de Justicia, sino la aplicación generalizada del derecho comunitario por parte de los tribunales nacionales.

Así, creo que hay dos razones que explican que sea el instrumento de la cuestión prejudicial el que más hace por una progresiva integración jurídica comunitaria. La primera de ellas, de orden práctico, consiste en la mayor dificultad o rareza de que se interpongan recursos directos, al menos en lo que respecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Frente a eso, cualquier recurso desarrollado ante los tribunales internos en el que sea procedente la aplicación del derecho comunitario puede dar lugar, en su caso, a una cuestión prejudicial, lo cual abre enormemente las posibilidades de intervención del Tribunal de Justicia, si no a instancia directa de un particular, si al menos con ocasión de un recurso interpuesto ante la jurisdicción interna por un particular.

La otra razón es que la cuestión prejudicial fuerza la interrelación de los sistemas judiciales nacionales con el Tribunal de Justicia, configurando

precisamente los fundamentos de un sistema jurisdiccional común propio de un sistema federal (por mucho que, como es obvio, hablar de tal perspectiva es, todavía, un futuro relativamente alejado). Para la creación de una conciencia ciudadana de estar inmerso en un sistema judicial integrado y para la propia realidad de la integración, es casi más relevante que ese ciudadano vea que un tribunal nacional le aplica el derecho común europeo y que, en su caso, dicho tribunal haya de consultar la interpretación de la norma comunitaria al Tribunal de Justicia, que la posibilidad de recurrir directamente al propio Tribunal de Justicia, posibilidad más restringida y, al menos en una primera etapa, más infrecuente.

3. El tercer punto que señalamos como indicativo de un sistema jurisdiccional integrado es la existencia de un tribunal superior que permita una homogeneización, al menos en lo fundamental o básico, de la interpretación del derecho común a ese sistema. Es claro, y así se deduce de todo lo visto hasta ahora, que el sistema jurídico comunitario cuenta con ese tribunal superior, el Tribunal de Luxemburgo.

Por un lado, es el único Tribunal que conoce de los posibles incumplimientos por parte de los órganos comunitarios, lo que le otorga la citada posición de manera indiscutida. Pero es, sobre todo, a través de la cuestión prejudicial, como dicha función de tribunal superior adquiere todo su relieve. La interpretación de un corpus normativo complejo y creciente a ritmo cada vez más rápido por doce sistemas judiciales diferentes, con tradiciones tan distintas, por ejemplo, como la británica y la continental, abocaría a abismos interpretativos que, a medio plazo tan sólo, impedirían hablar de un derecho comunitario común. Sin embargo, la posibilidad en unos supuestos y la obligatoriedad en aquellos más decisivos —cuando no cabe ya una ulterior decisión interna—, de deferir la interpretación de la norma comunitaria aplicable al Tribunal de Justicia, permite dicha función de unificación y, con ello hablar, sin género de dudas, de un tribunal superior que monopoliza la interpretación final del derecho comunitario.

Ahora bien, tal función de homogeneización, cuando viene ejercida a través de la cuestión prejudicial, sólo es eficaz si se cumple una doble condición. Primero, que efectivamente se eleve la cuestión cuando así viene procesalmente requerido. Segundo, que la decisión del Tribunal de Justicia sea respetada, lo que quiere decir que sea acogida por el juez nacional la interpretación o la decisión de validez adoptada por el Tribunal al resolver el caso a quo que motivó la cuestión.

Resulta por ello de interés reseñar los dos supuestos en los que las jurisdicciones nacionales han cuestionado de una manera u otra esta autoridad del TJ como tribunal superior.

Un caso es la decisión del Consejo de Estado francés de no plantear la cuestión en virtud de la doctrina del acto claro, inspirada en su propia tradición jurídica, basada en la separación entre la jurisdicción ordinaria y la administrativa, única competente para decidir el sentido del acto administrativo y a la que no sería necesario recurrir por parte de la jurisdicción ordinaria en los casos en que el acto administrativo no suscite dudas fundadas al juez correspondiente. Tras las primeras decisiones del Consejo de Estado, severamente criticadas tanto por la propia doctrina francesa como por la comparada, el TJ ha ido, sin embargo, asumiendo esta doctrina, si bien con importantes matices y clarificaciones (en Sentencia Cilfit, de 6 de octubre de 1982) para evitar simples resistencias como las protagonizadas inicialmente por el Consejo de Estado francés (el cual llegó a aplicar la referida doctrina pero sosteniendo una interpretación «clara» contraria a la mantenida previamente por el propio TJ). Entre los requisitos exigidos por el Tribunal para que pueda aplicarse la doctrina del acto claro, destaca el que el tribunal que la aplique entienda que la claridad será también evidente para las demás jurisdicciones nacionales y para el TJ.

El segundo supuesto, más divulgado, se debió a los Tribunales Constitucionales alemán e italiano. En ambos casos éstos, aun con diferentes matices, se declararon competentes para controlar el respeto al catálogo propio de los derechos fundamentales de los actos de los órganos comunitarios (de interés es, sobre todo, la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 29 de mayo de 1974). En este caso, se produjo también una progresiva deflación de la controversia, debido a la inteligente actitud del TJ de asumir el standard común de los Estados miembros en materia de derechos fundamentales.

4. Lo anterior nos aboca al cuarto punto señalado como rasgo propio de un sistema jurisdiccional integrado: la coercibilidad de las decisiones del TJ. Huelga decir que sí son coercitivas, por aplicación de las propias reglas procesales internas, las decisiones de los tribunales nacionales en aquellos casos en que aplican el derecho comunitario. Tampoco hay problema en relación con las decisiones de control sobre actos de órganos comunitarios, pues éstos son parte del propio sistema comunitario y se encuentran directamente vinculados por las decisiones del Tribunal.

Sin embargo, es éste, aparentemente, el eslabón más débil de la integración jurisdiccional: nada impide que una jurisdicción nacional desoiga las decisiones del TJ en cuestiones prejudiciales. Ciertamente, cabría un recurso de constatación de infracción (art. 169-170 TCEE), ya que una jurisdicción nacional es una autoridad interna cara a la Comunidad Europea. Sin embargo, su utilización es escasa,

debido a que constituye un arma demasiado fuerte que, en caso de condena, tiene una repercusión política con frecuencia desproporcionada respecto a la infracción. Por ello, se procura alcanzar una solución en las fases administrativas anteriores a la propiamente jurisdiccional. De hecho, en ningún caso, se ha empleado el citado recurso tras la no utilización de la cuestión prejudicial o por no seguimiento de la doctrina establecida por el TJ por parte de tribunales internos.

Y, más aún, incluso el recurso de constatación de infracción no supone coerción sobre el Estado, sino tan sólo, como su propia denominación indica, la constatación de que el Estado denunciado ha cometido una infracción y las medidas que debe adoptar. Pero, si no lo hace, lo único que se produce es la apertura de un segundo procedimiento por infracción. Un inconveniente suplementario es que las partes carecen de acción para incoar el procedimiento por infracción citada. Ello ha hecho plantearse a la doctrina la posibilidad de interponer en tales casos recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por violación del art. 6 del Convenio de Roma. Asimismo, también cabe pensar en la posibilidad de exigir responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por el no seguimiento por parte de los tribunales nacionales de las decisiones del Tribunal de Justicia.

Todos estos problemas reseñados no quitan el que existe una coerción institucional y doctrinal progresivamente más intensa que hace que los supuestos de desobediencia abierta sean excepciones.

III. El Tribunal de Justicia: tribunal internacional o tribunal interno.

En realidad, esta cuestión se encuentra ya doctrinalmente algo superada. Por un lado, es indudable que no tiene una naturaleza unívoca, esto es, que, en todo caso, será mixto. Pero, probablemente, eso ha sido siempre evidente. La cuestión es, por tanto, la de qué aspecto o faceta resulta predominante.

Ciertamente, el Tribunal posee competencias de carácter internacional, pues como tal hay que calificar la facultad de resolver conflictos entre Estados sobre divergencias en cuanto a la interpretación y aplicación de los Tratados (por ejemplo, a través del recurso de constatación de infracción al que antes nos hemos referido). Pero no cabe duda que no ha sido esa su función predominante.

En efecto, parece indiscutible que el TJ es, sobre todo, un tribunal «interno» de las Comunidades, no sólo por el rasgo del acceso directo de los ciudadanos —insólito en tribunales internacionales—, sino por ser un elemento de un sistema

complejo que se articula por medio de la cuestión prejudicial. Incluso cuando se produce un incumplimiento estatal, interviene un órgano interno de las Comunidades, la Comisión, quien en definitiva actúa como promotor del caso.

Así, los dos pilares técnicos de su labor como Tribunal de las Comunidades, prioridad del derecho comunitario y efecto directo de amplios sectores del mismo, que se traduce en la directa creación de derechos y obligaciones para los particulares, sólo son predicables de un orden jurídico complejo y del Tribunal que lo aplica.

Tras todo lo anterior, cabe concluir que, efectivamente, el sistema de la justicia comunitaria puede calificarse de un sistema jurisdiccional en fase creciente de integración funcional —en el que la pieza fundamental es el Tribunal de Justicia—, si bien no orgánicamente integrado. A este respecto cabe reseñar la problemática que podría plantearse en relación con el principio constitucional de la unidad del poder judicial español (art. 117, 3 y 5 CE).

Todo ello sin entrar en la eficacia integradora de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en especial, mediante la incorporación al corpus de derecho comunitario de los derechos fundamentales comúnmente reconocidos en los países miembros y garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, así como el reconocimiento como principios aplicables al mismo de principios jurídicos generales extraídos también de los ordenamientos particulares de los Estados.

IV. Perspectiva federal.

Para finalizar, una breve mención a las líneas de evolución posible del Tribunal de Justicia en una perspectiva federal. Necesitaría para ello reforzar su función de Tribunal superior y de Tribunal constitucional. Su función de Tribunal superior se ejerce ahora, sobre todo, vía cuestión prejudicial, frente a las jurisdicciones internas, indicándoles la validez o el sentido del derecho comunitario. En este sentido, podría reforzarse su función de Tribunal superior introduciendo algún procedimiento de apelación o de casación frente a las resoluciones de los tribunales superiores internos.

En cuanto a la perspectiva de un tribunal constitucional europeo, el TJ garantiza ya la distribución de competencias entre Estados miembros y órganos comunitarios, así como la conformidad de los actos comunitarios a los Tratados constitutivos. Carece sin embargo de cualquier facultad de control sobre la labor de

los legislativos nacionales mediante procedimientos análogos a los que existen en los sistemas con control de constitucionalidad (recursos directos frente a leyes y cuestiones de inconstitucionalidad). Lo cual no obsta a que a través del mismo procedimiento de constatación de infracción puede ponerse en cuestión la producción normativa del legislador nacional, aunque no constituya un procedimiento de inconstitucionalidad como los indicados.